

¿Cerrar filas?

José Luis Piñeyro

23 de diciembre de 2006

El reciente operativo militar-policíaco en Michoacán busca dos objetivos: uno, fortalecer la débil legitimidad de Calderón al hacer efectiva la promesa electoral de otorgar seguridad pública con mano dura; el otro, enfrentar la obvia situación de emergencia en este estado y otros más (Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León) debido al reto del expansivo y violento narcotráfico.

Aquí abordaremos este último objetivo. Las autoridades han informado que esos estados seguirán en la lista de operativos futuros y que se contempla una guerra larga en el tiempo hasta recuperar a plenitud la capacidad de respuesta del Estado. Cabe preguntarse: ¿existe capacidad de respuesta en el amplio espacio territorial? Pues tiempo y espacio más correlaciones de fuerza político-militar son los ingredientes de la estrategia en curso.

También otros articulistas de EL UNIVERSAL han señalado ciertos obstáculos para avanzar en la ruta trazada (Ernesto López Portillo, "Operativo Michoacán, ¿qué sigue?") o hasta dónde se puede pensar en triunfar en la batida antinarcóticos (Jorge Chabat, "¿Guerra ganable?"). No repetiré los argumentos sobre las limitaciones (crecimiento exponencial de la demanda de drogas y otros bienes y servicios ilegales, debilidad de la cultura de la legalidad y de las instituciones, entre otras) señaladas por el primero o las dudas del segundo sobre poder ganar tal contienda antinarcóticos; comparto los señalamientos sobre las debilidades y lo imposible de ganar en México y en cualquier nación la batida al narcotráfico, a lo más se puede establecer mayores controles, sobre todo mientras exista una creciente demanda interna y en especial de Estados Unidos.

Sí quiero señalar que ambos autores enfatizan poco que prevalece entre las autoridades un enfoque represivo y reactivo y para nada preventivo, rehabilitatorio y participativo, además de no ponderar con suficiencia la influencia del deteriorado tejido social. Prevalece una concepción oficial estatocéntrica que supone que es el Estado el eje fundamental y único proveedor de seguridad pública a la sociedad.

Se requiere complementar la estrategia anticrimen con amplias y permanentes campañas preventivas sobre el consumo de drogas y la comisión de otros delitos a través de programas y anuncios en los medios de comunicación, de pláticas en centros educativos de primaria a universidad, en las fábricas y comercios, en clubes e iglesias, entre otros centros de reunión. También se deben ampliar las redes y centros de rehabilitación de drogadictos e impulsar y generar formas de participación social de acuerdo con las características y necesidades de cada zona o estado, como sucede con las policías comunitarias rurales de Guerrero o las juntas de vecinos anticrimen que se están organizando en Iztapalapa. Estos deben ser frentes de lucha prioritarios a corto plazo y complementarios a las acciones antidelinquenciales. Apostar sólo a la articulación tiempo más espacio más correlación político-militar positiva resulta restringido, se requiere agregar la correlación social.

Apostar sólo a la fuerza física del Estado y no a la fuerza moral de la nación es reducir la estrategia a victorias espectaculares, pero no a controlar el curso de la guerra pues no se atacan las raíces estructurales materiales (condiciones de vida paupérrimas) y morales (desconfianza, pasividad, descomposición familiar y social). Por ello, otro frente de lucha prioritario de corto y largo plazo es el combate a la generalizada pobreza en la que sobreviven más de 55 millones de mexicanos; con 1% que se dedique a actividades delinquenciales, o sea, 550 mil personas, el narcotráfico y en general el crimen profesional tienen un ejército de reserva permanente para su reproducción ampliada y para el cotidiano tráfico ilegal de drogas, migrantes, niños, mujeres, órganos humanos, armas, carros, mercancías contrabandeadas o robadas, etcétera.

Calderón hizo un llamado a cerrar filas frente al narcotráfico para recuperar la seguridad pública; sin duda hay que hacerlo, pero también debemos exigirle recuperar la seguridad social, laboral, educativa y alimentaria que no pasa por el ofensivo aumento de dos pesos diarios al salario mínimo o por la disminución presupuestal en esos rubros. Exigirle que cumpla con las promesas de generación masiva de empleos, pero bien pagados y de combate estructural a la pobreza y no sólo a la inseguridad pública, únicos caminos para recuperar la seguridad nacional, del Estado y de su propio gobierno.

Profesor investigador de la UAM-A